

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**



**SALA LABORAL**

Medellín, diez (10) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

**AUTO**

Para llevar la representación de la parte accionada Colpensiones, se le reconoce personería a la doctora CARMEN YOJANA RAMÍREZ VILLEGAS portadora de la tarjeta profesional 205.907 de C. S de la J, de acuerdo a la sustitución dada por la firma Cal & Naf Abogados SAS, quien llevará la representación de dicha entidad.

**SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA**

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ordinario radicado con el número 05001310501320170030001, promovido por la

señora **OMAIRA PATRICIA ECHAVARRÍA CARMONA** en contra de **COLPENSIONES** con la finalidad de conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia proferida por el juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín .

De conformidad con el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...” se toma la decisión correspondiente mediante providencia escrita número **253**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala

### **ANTECEDENTES**

La señora **Chavarría Carmona**, solicitó mediante el presente proceso, el pago de, el retroactivo de la pensión de sobreviviente de manera reajustada desde el 1 de noviembre del año 2009, última mesada girada a la anterior beneficiaria de la prestación y el 30 de agosto del año 2011, día anterior a la fecha en la que se reconoció la misma, con el pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 desde el 20 de octubre del año 2010. Igualmente, el pago de los intereses de mora generados sobre el retroactivo pagado mediante resolución GNR 207911 de 15 de agosto de 2013, en suma, de \$15.917.300 por las mesadas pagadas entre el 1 de septiembre del año 2011 y el 30 de agosto del año 2013, liquidados desde el 20 de octubre del año 2010. Indexación de las condenas. Lo ultra y extra petita, costas del proceso.

Como fundamento factico de lo pretendido, indicó que el 9 de junio de 1994, falleció el señor Gustavo de Jesús Restrepo Carmona, por lo que mediante Resolución 1059 de 1995 se concedió pensión de sobreviviente a la señora Genoveva Carmona Martínez en su calidad de madre del afiliado finado. Ante el fallecimiento de esta beneficiaria, la aquí demandante presentó solicitud de pensión de sobreviviente como hermana en situación de invalidez, la cual, fue negada por la entidad. En Resolución GNR 207911 de 15 de agosto del año 2013, Colpensiones reconoció la pensión de sobreviviente a la demandante desde el 1 de septiembre del año 2011 aduciendo que la pensión de sobreviviente se había girado a la anterior beneficiaria hasta dicha fecha. Pese a ello, la actora narró que los periodos indicados reportan reintegro de los valores, por ende, de manera infructuosa, solicitó el pago a la entidad.

Admitida la demanda, fue notificada a la pasiva, quien dio respuesta aceptando los hechos narrados, pero negándose a la prosperidad de lo pretendido, interponiendo las excepciones de *“Inexistencia del retroactivo”*, *“Inexistencia de obligación de pagar intereses de mora del art. 141 de la Ley 100 de 1993”*, *“Compensación Indexada”*, *“Prescripción”*, *“Imposibilidad de condena en costas”*, *“Excepción innominada”*, *“Descuento del retroactivo por salud”*.

En sentencia del veintitrés (23) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, declaró probada de manera oficiosa la excepción de cosa juzgada y absolvió a la pasiva de todas las pretensiones invocadas en su contra.

Fundamentó su decisión, en que, de manera previa, y en el proceso 05001310502120110096500, se absolvió a Colpensiones de todas las pretensiones invocadas en su contra, por lo cual, no podría la aquí demandante peticionar el reconocimiento en dicho proceso el retroactivo pensional y los intereses moratorios.

### **APELACIÓN**

El apoderado de la parte actora se apartó de la decisión tomada por la juez de primera instancia, bajo el argumento que lo solicitado es, el reconocimiento del retroactivo de la prestación que fue reconocida por vía administrativa. Indicó que, el proceso 05001310502120110096500, cuando se encontraba en sede de casación, Colpensiones reconoció la prestación solicitada el cual, fue un hecho sobreviniente. Así las cosas, haber declarado la cosa juzgada considera fue un fallo extra petita que se aparta de la fijación del litigio que no fue otra más que definir si había derecho o no al retroactivo y no a la pensión, pues ésta fue reconocida administrativamente. Explicó que el no haber puesto en conocimiento al juzgador que hubo un proceso previo no fue una deslealtad procesal, pues las partes entendieron que, lo discutido era el retroactivo y no el reconocimiento de la prestación, por ello, la entidad al contestar no interpuso la excepción. Narró que no hay identidad de objeto pues el proceso anterior versó sobre el reconocimiento pensional y este, sobre el retroactivo de la pensión que ya está en cabeza de la demandante. Sumado a ello, si bien se indica que hubo unas mesadas que deben tramitarse como pago de herederos, llamó la atención sobre que, pese a que las mesadas fueron consignadas a la cuenta bancaria de la beneficiaria que feneció, no entraron a su patrimonio. Finalmente, indicó que desconocer el reconocimiento procesal va en contra de la confianza legítima, pues si bien había sentencia judicial

que negó la prestación, Colpensiones la reconoció a mutuo propio, y el escenario para dirimir esa situación sería una acción de lesividad ante un Juez Administrativo.

Sobre los intereses moratorios, precisó que es un hecho objetivo y la reclamación se elevó desde el 19 de agosto del año 2010, por lo cual, más allá del reconocimiento pensional, el pago fue realizado de manera tardía, lo que a su sentir funciona igual manera respecto a la indexación peticionada, y de haber cosa juzgada no puede ser extensiva a estas pretensiones.

### **ALEGATOS**

Corrido el traslado para ello, Colpensiones solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, haciendo un recuento de los elementos necesarios dados en el artículo 303 del CGP, y resaltó que en el proceso promovido ante el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, se solicitó el reconocimiento de la pensión de sobreviviente, la cual, fue negada, y en el proceso de marras se solicita el pago del retroactivo e intereses moratorios coincidiendo así con los presupuestos de la cosa juzgada.

### **PROBLEMA JURÍDICO**

El problema jurídico de esta instancia, consiste en determinar si le asiste a la señora Omaira Patricia Chavarría Carmona el pago del retroactivo pensional, o si, por el contrario, ello fue decidido de manera previa.

Igualmente, la procedencia de los intereses moratorios e indexación sobre el retroactivo ya cancelado.

## **CONSIDERACIONES**

Sea lo primero indicar, que entro del margen del proceso, el juez, como director, tiene la facultad, de declarar, de oficio, una excepción que no haya sido propuesta por el extremo pasivo si advierte al momento de dar estudio al problema jurídico, que ésta puede salir adelante.

En el presente caso, en Resolución 001059 de 1995 se reconoció pensión de sobreviviente a la señora Genoveva Carmona Martínez en calidad de madre del finado afiliado Gustavo de Jesús Restrepo Carmona y mediante resolución 013818 del 31 de mayo del año 2011, el entonces Instituto de Seguros Sociales, resolvió negar la pensión de sobreviviente solicitada por la muerte del afiliado Gustavo de Jesús Restrepo Carmona, a la señora Omaira Patricia Chavarría Carmona.

En resolución 032535 del 25 de noviembre del año 2011, se resolvió no reponer la decisión de negar la prestación pretendida.

Finalmente, en acto administrativo GNR 207911 del 15 de agosto del año 2013, se concedió la pensión de sobreviviente a la señora Omaira Patricia Chavarría Carmona, desde el mes de septiembre del año 2011.

Así mismo, la aquí demandante interpuso acción judicial, conocida por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, y en contra de Instituto de Seguros Sociales cuyas pretensiones fueron:

*“PRIMERA: Declarar que, a mi mandante, la señora OMAIRA PATRICIA CHAVARRÍA CARMONA, identificada con cedula de ciudadanía N° 42.764.437, le asiste el derecho a percibir por cuenta del INSTITUTO DE*

*SEGUROS SOCIALES, la pensión de sobreviviente, causada por el fallecimiento de su hermano, el señor GUSTAVO DE JESÚS RESTREPO CARMONA.*

*SEGUNDO: Condenar al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, a pagar a favor de mi mandante la pensión de sobreviviente causada por el fallecimiento de su hermano, retroactivamente, a partir del 9 de junio de 1994 fecha de su deceso o en subsidio, a partir del 23 de octubre del año 2009 fecha del deceso de la madre del causante y de manera vitalicia con las mesadas adicionales y los respectivos incrementos anuales, de conformidad con el artículo 14 de la ley 100 de 1993.*

*TERCERA: Que se condene al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a pagar favor de mi mandante, los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por el retardo injustificado en el reconocimiento y pago de la pensión, desde la fecha de causación de cada una de las mesadas pensionales, hasta la fecha en que se haga el pago efectivo.*

*CUARTO: En subsidio a la anterior pretensión, solicito se condene al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a pagar la indexación de las mesadas pensionales, liquidada desde la fecha de generación de cada una de ellas hasta el momento de su pago efectivo.”*

En sentencia del ocho (8) de febrero del año dos mil doce (2012), la juez Adjunta del Juzgado Veintiuno (21) Laboral del Circuito de Medellín, absolvió al Instituto De Seguros Sociales de todas las pretensiones invocadas en su contra, y declaró probada la excepción de “inexistencia de la obligación”. Habiéndose interpuesto por la parte actora el recurso de alzada, la Sala Tercera del Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín resolvió Confirmar en todas sus partes la sentencia proferida en primera instancia, y encontrándose en trámite en sede de casación, la parte actora elevó desistimiento del recurso el 20 de

octubre del año 2014 bajo el argumento, que, la entidad por vía administrativa había concedido lo pretendido.

En auto del 29 de octubre del año 2014, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, acepto el desistimiento elevado, por lo cual, **la sentencia de Segunda instancia que confirmó la absolución quedó en firme, es decir, judicialmente se negó la pensión de sobreviviente a la señora Omaira Patricia Chavarría Carmona.**

En cuanto a los elementos que caracterizan la cosa juzgada en los términos del artículo 303 del Código General del Proceso, aplicable en materia laboral por remisión expresa del artículo 145 del código de procedimiento laboral, consiste en que un asunto a resolver verse sobre idéntico objeto a una situación ya resuelta por los mismos intervinientes.

La Sala de Casación Laboral en sentencia CSJ SL, 12 nov. 2003, rad. 20998, reiterada en la CSJ SL1364-2019, sostuvo:

*El artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, acusado por la censura como indebidamente aplicado por el Tribunal, señala que para que la sentencia ejecutoriada proferida en proceso anterior tenga fuerza de cosa juzgada, se requiere: 1) Que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto; 2) Que se funde en la misma causa del proceso anterior y, 3) Que haya identidad jurídica de las partes en ambos procesos (eadem conditio personarum)*

*“También se tiene dicho, que por regla, los jueces no pueden resolver por vía general, pues sus decisiones deben limitarse al caso concreto y con valor para el mismo, razón por la cual la cosa juzgada tiene dos límites, a saber:*



*“1) El objetivo. Referido a la cosa sobre la que versó el proceso anterior y, a la causa petendi. El primero constituido por el derecho reconocido, declarado o modificado por la sentencia, en relación con una cosa o varias determinadas, o la relación jurídica declarada, pues sobre la misma cosa pueden existir diversos derechos y, tenerse el mismo derecho sobre diferentes cosas, de tal manera que si falta identidad del derecho o de la cosa, se estaría en presencia de distintos litigios y pretensiones. En torno al segundo límite, se refiere al fundamento alegado para conseguir el objeto de la pretensión contenida en la demanda, que al mismo tiempo equivale al soporte jurídico de su aceptación o negación por el juzgador en la sentencia y,*

*“2) Límite subjetivo, relativo a las personas que han sido parte en ambos procesos.*

*“De tal manera que, si se presenta identidad de objeto, pero varía la causa petendi, no existe identidad objetiva en los dos procesos, mucho menos si no hay identidad de objeto y causa, lo cual, indiscutiblemente significa que tampoco se estará en presencia del fenómeno de la cosa juzgada.*

Esta figura procesal, tiene un carácter esencial en el marco de un estado social de derecho que requiere la seguridad y la confianza en las decisiones judiciales, por lo cual, debe respetarse de manera ineludible aquello que ya fue decidido judicialmente. Empero para que haya imposibilidad en el juzgador de valorar la situación nuevamente, es primordial que no sólo haya identidad de partes sino, que el objeto litigioso sea el mismo, así ha quedado ampliamente decantado por el máximo órgano de cierre, es decir, debe hablarse del mismo bien jurídico

reclamado, cosa pedida o beneficio jurídico (CSJ SL6097-2015, CSJ SL1686-2017, CSJ SL4665-2021, CSJ SL642-2023)

Inicialmente no hay duda, que tanto en el proceso que nos convoca como en el tramitado con antelación en el Juzgado Veintiuno Laboral hay identidad de partes, pues la señora Omaira Patricia Chavarría Carmona accionó el aparato jurisdiccional en contra del ente administrador del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, hoy, Colpensiones.

Respecto a la identidad de las pretensiones, es imperioso aclarar que en el proceso tramitado ante el Juez Veintiuno Laboral, se solicitó el reconocimiento de la pensión de sobreviviente desde la muerte del afiliado o desde el fallecimiento de la beneficiaria que recibía la prestación, y en este caso, se solicita el retroactivo de esta prestación ya reconocida administrativamente y desde la muerte de la beneficiaria última que percibía el derecho.

Si bien como lo indica en su recurso el procurador judicial de la parte actora, podría entenderse como un hecho sobreviviente el reconocimiento de la prestación de sobreviviente realizada por vía administrativa por Colpensiones en Resolución GNR 207911 de 2013, el beneficio jurídico que se reclama, es decir, el pago de dichas mesadas pensionales, es efectivamente el mismo.

No puede dejarse por alto, como lo indicó la a quo, que, la sentencia de segunda instancia que confirmó la absolución del derecho petitionado por la demandante quedó en firme ante el desistimiento elevado en sede de casación y por ello, **para todos los efectos que ante la jurisdicción refiere, la señora Omaira Patricia Chavarría Carmona no es beneficiaria de la pensión de sobreviviente que deprecó por la muerte de su hermano, el señor Gustavo de Jesús Restrepo Carmona.**

En sentencia CSJ SL7991-2014 reiterada en la CSJ SL4325-2022 se explicó por parte de la Sala Laboral que:

*[...] no es suficiente con que se hayan invocado idénticas pretensiones en uno y otro proceso para pretender una realización automática de la cosa juzgada, ya que se necesita, además, el pronunciamiento judicial pues solo con la decisión definitiva del litigio puede considerarse que, sobre las circunstancias de hecho alegadas en ambos casos, se pronunció la jurisdicción y sobre dicho pronunciamiento puede fundarse la excepción.*

En lo que refiere a la judicatura entonces, las mesadas pensionales desde el 1 de noviembre del año 2009 y el 30 de agosto del año 2011, no deben ser pagadas por que el asunto ya fue resuelto negativamente, y ordenar su pago, transgrede la seguridad jurídica, más allá de afectarse la confianza legítima como lo indica la parte actora, pues el actuar que de manera unilateral realizó la entidad, no se sustentó en decisión judicial alguna, y para dicho momento, al ventilarse el asunto ante la jurisdicción, era esta y no otra quien tenía la competencia para dirimir el asunto, razón ésta por la que, no era posible definir otra vez si el derecho debía pagarse desde el 1 de noviembre de 2009, pues se insiste, en lo que a la judicatura corresponde, la señora Echavarría Carmona no tiene derecho alguno, pues así se declaró.

En igual sentido ocurre con el retroactivo cancelado en la Resolución GNR 207911 de 2013 en comentario, pues el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 tasó un interés con el fin de proteger a aquel pensionado cuya mesada no se ha pagado de manera oportuna, al no tener la señora Chavarria Carmona la calidad de beneficiaria, pues así lo declaró sentencia judicial, la entidad de seguridad social nunca se constituyó en mora, ya que el pago realizado fue de manera libre y voluntaria, contrario al proceso que en ese momento se encontraba en trámite.

A juicio de este juez plural, le asistía el deber a la *a quo*, de declarar la cosa juzgada, pues pese a la inactividad de la demandada en proponerla como medio exceptivo, al observar la documental que concluya en ella debía así decirlo. La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en providencias, como 39366 de 23 de octubre del año 2012, de manera pacífica ha expresado:

*‘Pero para que la cosa juzgada adquiriera la fuerza que persigue la ley, no basta que solamente una o dos de las identidades antedichas se reflejen en el nuevo proceso; como tampoco, para negarla, que por la simple apariencia se desdibujen los elementos que la conforman, esto es, el objeto del proceso, la causa en que se funda y los sujetos entre quienes se traba la disputa. Por eso, para que se estructure la cosa juzgada, de una parte, deben concurrir, necesariamente y en esencia las tres igualdades anotadas, y, de otra, deben aparecer identificados claramente los elementos que las comportan.*

*La cosa juzgada es una institución que por perseguir los objetos de certeza y seguridad jurídica anunciados, así como puede ser alegada por la parte interesada desde el mismo umbral del proceso a través de las llamadas excepciones previas que por sabido se tiene tienden a impedir el adelantamiento irregular del proceso, también puede ser declarada oficiosamente, aún en la segunda instancia, pues el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil --artículo 282 del nuevo Código General del Proceso--, aplicable a los procesos del trabajo por la remisión de que trata el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que concede al juzgador dicha posibilidad, salvo las consabidas restricciones respecto de la nulidad, la compensación y la prescripción, las cuales deben ser siempre alegadas, no puede entenderse derogado por la vigencia del artículo 66 A del código procedimental últimamente citado. Por manera que, en cuanto a dicha alegación no asiste razón alguna a los recurrentes, dado que, como se ha asentado, la cosa juzgada interesa al orden público y, por tanto, bien pueden los jueces de segundo grado declararla, aún, de oficio.*

“.

Es por ello, que, ante la configuración de ésta, el juzgador está en plena capacidad de declararle de oficio.

Ahora, no está demás, recordar que atañe a las partes la obligación de actuar de manera transparente en el proceso, precisamente para garantizar la integridad y la confianza en el proceso judicial, por lo cual, la existencia de un proceso previo, debió ser informada en la demanda.

Conforme lo explicado, se confirmará de manera íntegra la sentencia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín.

Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante en la suma de \$1.160.000

Es por ello, que es acertada la decisión tomada por la juez de primera instancia y deberá confirmarse,

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

### **RESUELVE**

**PRIMERO: Confirmar** la sentencia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, por las razones antes expuestas.

**SEGUNDO:** Costas en esta instancia a cargo de la parte actora y en la suma de \$1.160.000.

0500131050132017030001

Lo resuelto se notifica en **EDICTO**. Se ordena regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

**Francisco Arango Torres**  
**Magistrado**  
**Sala Laboral**  
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **63681b458335cf888a913969b81aaa443acc41a439b896c0628839a08d2e02ec**

Documento generado en 10/08/2023 03:20:00 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**